LA POLITICA ECONOMICA Y LA ECONOMIA POLITIZADA DE MEXICO*

MIGUEL ÁLVAREZ URIARTE

La actividad económica en nuestro país... es objeto de desprecio o al menos de condescendencia. Las leyes económicas son consideradas como procedimientos que se pueden someter voluntariamente a los deseos de los hombres y que se pueden ignorar para reemplazarlas por la generosidad, la presunción o la ingenuidad.

Marcel Demongue—J.Y. Eichenberger *La Participación*

Introducción

EN ESTAS NOTAS se examinan con sentido crítico algunos de los aspectos más importantes de la política económica y de la economía politizada de México durante tres períodos de la administración pública sexenal incluidos en el lapso 1959-1976. Se dividen en dos partes: en la primera se realiza un breve análisis de lo acontecido en 1959-1970 que se titula: ¿Desarrollo estabilizador o desestabilización del desarrollo?; en la segunda se trata con mayor profundidad lo ocurrido en 1971-1976, bajo los enunciados: ¿Desarrollo compartido o estancamiento inflacionario? y ¿Desarrollo compartido o economía ficción? Al final se presentan las conclusiones. En ningún momento, el autor tuvo la intención de evaluar o enjuiciar decisiones políticas que en su oportu-

* Este documento fue elaborado en 1977-1978, habiendo recibido la valiosa colaboración de Juan Carlos Andrade Salaverria. La entera responsabilidad de los juicios expresados recae en el autor. Una revisión posterior que se hizo de este ensayo, tomando en cuenta la nueva bibliografía disponible, lo hubiera modificado y enriquecido. Empero, sus conclusiones no habrían cambiado apreciablemente; el período de la economía mexicana que aquí se estudia todavía necesita de aportaciones sustanciales que expliquen mejor lo que sucedió, sobre todo de parte de aquellos que contribuyeron a los principales acontecimientos y decisiones. A menos que se indique lo contrario, las fuentes de datos macroeconómicos se obtuvieron de los informes anuales del Banco de México, S.A. y del modelo econométrico de México elaborado por Diemex-Wharton de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos.

nidad se realizaron al conjugarse multitud de factores, los cuales muy parcialmente pudo reconocer. De la misma manera, tampoco entra en el campo de las recomendaciones o de opciones viables que hubieran sido realistas en las circunstancias imperantes.

I. *¿Desarrollo estabilizador o desestabilización del desarrollo?*

De 1959 a 1970 la economía mexicana observó un desarrollo dinámico, su producto interno bruto (PIB) a precios constantes registró un crecimiento medio anual de 6.7% y estuvo acompañado de una relativa estabilidad en los precios internos o costo de la vida; el índice de precios implícito en el PIB aumentó a razón de 3.6% anual. En el mismo período hubo saldos negativos en la cuenta corriente de la balanza de pagos que estuvieron acentuándose irregularmente, pero no de manera grave, lo que aunado a la contratación de créditos externos, principalmente de largo plazo, coadyuvaron a mantener el mismo tipo de cambio de la moneda nacional desde 1954 (12.50 pesos por dólar estadounidense, 8 centavos de dólar por un peso) y la tradicional convertibilidad cambiaría.

En ocasión de la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, celebrada en septiembre de 1969, el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena, realizó una síntesis de las principales medidas que sistemáticamente se habían aplicado a la economía del país desde 1959 y cuyo conjunto sirvió para que *a posteriori* se le reconociera como la estrategia del "desarrollo estabilizador".

Afirmó dicho funcionario que en 1959 México tenía una estructura productiva con oferta elástica, pero operando frente a una demanda sumamente inestable que ocasionaba un ciclo recurrente de inflación-devaluación. En años anteriores a 1959, nos dice, la inversión se financiaba básicamente mediante ahorros forzosos derivados de la inflación, que sólo beneficiaban a los empresarios quienes ajustaban rápidamente sus precios para obtener altas utilidades. La premisa fundamental de la nueva estrategia desechó la generación de ahorro inflacionario forzoso y adoptó un mecanismo que promovería el ahorro voluntario, como fuente no inflacionaria de financiamiento. Este mecanismo consistió en ofrecer incentivos que aumentarían la propensión marginal a ahorrar (incremento porcentual del ahorro por unidad de aumento en el ingreso nacional disponible), la cual se elevó de un promedio anual de 13% en 1951-1958 a uno de 21% durante el lapso 1959-1967.

La política fiscal, en lugar de promover una mayor captación de ingresos para el gobierno, generosamente fomentó la reinversión de utilidades de la empresa privada al convencerla de que en un mercado en expansión la rentabilidad futura del capital, al ser muy poco

gravada, resultaría superior a los dividendos presentes; al mismo tiempo, se estimularon las inversiones productivas a través de subsidios y exenciones; el ahorro personal se promovió mediante la emisión de nuevos instrumentos de captación financiera que se aprovecharon gracias a la perspectiva de un ingreso real creciente, una tasa de interés atractiva —superior al aumento del costo de la vida— y la seguridad de un tipo de cambio fijo.

La captación de ahorro externo también se incrementó debido, entre otros factores, al diferencial existente entre la tasa de interés interna, que se mantuvo por encima de la prevaeciente en los principales mercados internacionales de dinero y capital, así como por el propio desarrollo económico y la estabilidad y libertad cambiaria.

El gobierno concilió la apropiación de sus recursos financieros mediante medios no inflacionarios, al abstenerse de recurrir a emisiones primarias de dinero excesivas o de grandes emisiones de deuda interna, con el propósito de aumentar la propensión marginal a ahorrar de las empresas y de los individuos, y de fomentar la inversión privada, al dejar una oferta suficiente de fondos prestables en la banca comercial —mediante el mecanismo del encaje legal que ejerce el Banco de México— ante los requerimientos de una elevada demanda de crédito. Así, mientras que el crecimiento medio anual de la oferta monetaria durante 1950-1958 (de diciembre a diciembre) fue de 13.7%, observando cambios irregulares, en el período 1959-1970 fue de 11.5% con incrementos regulares.

De esta forma, el déficit gubernamental fue cubierto básicamente mediante la captación de recursos reales no forzosos provenientes de un sistema bancario que se modernizaba, en tanto que la estructura y la captación tributarias permanecieron casi invariables a fin de alentar la inversión privada, recurriendo al endeudamiento externo como un complemento para el financiamiento de dicho déficit.

Medidos por los cambios que experimentaron los principales agregados macroeconómicos disponibles, los resultados de la estrategia del “desarrollo estabilizador”, se mostraron satisfactorios al ser comparados con los registrados en el decenio de los cincuenta.

En tanto que de 1951 a 1958, el crecimiento medio anual del PIB real fue de 5.6%, el del producto real por habitante de 2.3% y el de los precios implícitos en el PIB de 7.5%; en el lapso 1959-1970 dichas tasas respectivas fueron de 6.7, 3.3 y 3.6 por ciento. Esto significa que en el último período hubo una mayor producción de bienes y de servicios, en su total y medido *per cápita*, mientras que los precios moderaron notablemente sus alzas.

El aumento medio anual de los salarios mínimos nominales, el de los reales y el de la productividad del trabajo fueron, respectivamente, de 10.4, 2.6 y 2.4 por ciento para el período 1950-1958 y de 6.5, 2.8 y 3.9 por ciento durante los años 1959-1970. Es decir, que para los

últimos años, aunque los salarios nominales aumentaron con menor rapidez, hubo una ligera mejoría en su poder de compra real; como al mismo tiempo hubo un mayor dinamismo en la productividad del trabajo, entonces también se favoreció la acumulación del capital y la disponibilidad de ahorros. La tasa o coeficiente de inversión (participación de la inversión bruta fija en el PIB en términos reales a precios de 1950) fue de 13.9% en 1950, subió ligeramente a 14.2% en 1959 y para 1970 se elevó a 19.6 por ciento.

Cabe destacar el gran auge que experimentó la intermediación financiera durante el decenio de los sesenta, así como su importante contribución al fortalecimiento de las finanzas públicas del país. Mientras que en los años del período 1950-1958 los pasivos del sistema bancario —captación de dinero— representaron aproximadamente el 28% del ingreso nacional, en el decenio de los sesenta fue algo superior al 40%. Si se compara la deuda financiera total respecto del PIB, se observa que aumentó de 30% en 1960 a 38% en 1965 y a 49% en 1970, sobresaliendo el crecimiento de la deuda no monetaria que se incrementó de 19% del PIB en 1960 a 37% en 1970. De esta manera, el déficit presupuestario del gobierno durante los años sesenta pudo financiarse preferentemente (en casi 90%) con recursos genuinos captados internamente, sin que ello significara una restricción perjudicial en la oferta de crédito disponible para el sistema bancario.

Sin embargo, estos resultados positivos de la estrategia del “desarrollo estabilizador” tuvieron como contrapartida una serie de desequilibrios e ineficiencias en el desarrollo de la economía y de injusticias en el reparto de la riqueza que se generó.

El sector agrícola apenas mantuvo un crecimiento medio anual de 4.5% de 1960 a 1970, algo inferior al del decenio anterior y se debilitó aún más en la segunda mitad de los años sesenta (2.7% anual), habiendo disminuido su contribución relativa a la captación de divisas dentro del sector exportador de mercancías e incluso incidió en el desequilibrio externo al tener que realizarse importaciones de productos alimenticios básicos, cuya producción resultó insuficiente para cubrir la demanda agregada. Entre las causas internas que definieron este comportamiento destacó la disminución relativa de la inversión destinada a la agricultura respecto al total, debido a la mayor prioridad que se atribuyó a otros sectores de la producción. De 1950 a 1965 la inversión pública orientada a esa actividad disminuyó de 20 a 3 por ciento del total y de 1960 a 1970, la inversión total (pública y privada) descendió de 14 a 4.5 por ciento del total. En los primeros años del decenio de los sesenta hubo aumentos en la superficie cosechada, lo que no ocurrió en los años siguientes; la política de precios de garantía que se adoptó en esos primeros años alentó ciertos cultivos para consumo interno pero afectó desfavorablemente a los de exportación; en el ámbito externo la fuerte competencia, la fluctuación de los

precios internacionales y el deterioro de estos últimos para algunos de los productos mexicanos de exportación, también contribuyeron a desalentar la oferta exportable.

El sector industrial, aunque registró altos índices de crecimiento, hacia finales de los años sesenta empezó a resentir los efectos de una elevada dependencia respecto de insumos de capital y de tecnología del exterior y de una notable falta de capacidad para generar sus propias divisas, debido a la ineficiencia derivada de un fuerte e indiscriminado proteccionismo, así como por su impotencia para continuar con el proceso de sustitución de importaciones hacia los bienes de capital. El encarecimiento excesivo de los insumos para el sector agrícola provenientes de la industria nacional provocó un sesgo anti-agrícola que también influyó en el estancamiento de este último sector.

Se presentó un desequilibrio externo creciente, sobre todo a partir de 1964, cuyas causas últimas se relacionan con el efecto antiexportador implícito en el proceso de sustitución de importaciones seguido, así como por la creciente dependencia de dicho proceso respecto de bienes de capital importados, tanto para reposición de la capacidad instalada, cuanto para nuevas inversiones. Igualmente el tipo de cambio que se había sobrevaluado alentó las importaciones, mientras que desestimulaba las exportaciones. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se incrementó de 300.5 millones de dólares en 1960 (21.9% del total de exportaciones de mercancías y servicios y 1.6% del PIB) a 945.9 millones en 1970 (32.2% del total de exportaciones y 2.7% del PIB). Consecuentemente, se acentuó la dependencia respecto de la inversión extranjera y sobre todo de la deuda pública externa (a precios corrientes en 1958 representaba el 6.2% del PIB, en 1967 el 9% y en 1970 el 12.7%), para poder sostener la capitalización y el crecimiento de la economía con bienes y servicios importados.

La concentración del ingreso se intensificó, abriendo una brecha de desigualdad cada vez más grande; la proporción de los ingresos monetarios (a precios de 1950) destinada a la fuerza de trabajo, estimada en relación con el producto interno bruto o riqueza acumulada en el país, aumentó de 27.6% en 1950 a 33.9% en 1969, para después disminuir a 30.6% en 1970. Antes ya mencionamos que hubo una mayor productividad del trabajo, respecto al salario real, en beneficio del empresario capitalista.

La explosión demográfica continuó agravándose y se acentuaron los problemas de concentración en las principales áreas urbanas, donde se agudizó la carencia de servicios municipales. Como corolario de todos estos desequilibrios, y en especial debido a la incapacidad de retención de la creciente mano de obra en el sector agrícola y de la baja absorción de la misma por parte del sector industrial (uso de tecnología intensiva en capital), los niveles de desempleo y subempleo se elevaron

notablemente, así como la emigración de los indocumentados a Estados Unidos. Esto constituyó una clara subutilización de los recursos humanos. Aún más, el creciente descontento social se manifestó de varias maneras en algunas zonas rurales y centros urbanos; los desórdenes estudiantiles de 1968 fueron una grave demostración del malestar existente, y fueron duramente reprimidos porque se pensó que atentaban contra la legitimidad del poder.

En síntesis, aunque se lograron ciertos avances en la evolución económica del país, el "desarrollo estabilizador" en su última fase resultó desestabilizador del desarrollo, puesto que generó desajustes o desequilibrios que no se remediaron, sino que fueron posponiéndose hasta que se hizo inevitable el cambio a otra estrategia económica.

II. *¿Desarrollo compartido o estancamiento inflacionario?*

La afloración de las consecuencias de los desequilibrios estructurales generados durante el lapso del "desarrollo estabilizador", algunas de las cuales se manifestaron con cierto rezago, aunado a presiones sociales que se agravaron, fueron elementos que influyeron sobre la nueva política económica que instrumentó la nueva Administración a partir de 1971, habiendo sido calificada desde sus inicios por algunos de sus funcionarios públicos con la pretensión de un "desarrollo compartido".

Ante el reajuste natural que conlleva un cambio de Administración, en 1971 el Gobierno moderó el gasto público (su inversión bruta fija en términos reales se redujo 8.2% respecto a la del año anterior), tratando de jerarquizar sus nuevas prioridades y de reducir el desequilibrio externo a que se llegó en 1970 (un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 945.9 millones de dólares y una deuda pública externa de 4 262 millones de dólares), derivado básicamente del tradicional aumento en el gasto público para poder terminar las obras del gobierno precedente. A esto se añadió la desaceleración en el crecimiento de la inversión bruta fija privada (en 1970 se incrementó en términos reales 11% y para 1971 observó una contracción de 1.5%). Si a esto se agrega la falta de estímulos a la demanda agregada, no debe extrañar que en 1971 el crecimiento del PIB real se redujera a 3.4%, tasa muy semejante a la del aumento demográfico, por lo que en términos *per cápita* hubo estancamiento. Esta situación no era la que pretendía promover el nuevo gobierno que se declaraba por un "desarrollo compartido", la realidad resultaba contraria a la que deseaba, por lo que su respuesta no se hizo esperar.

Así, a partir de 1972 es cuando se dejan ver los rasgos característicos de la nueva estrategia. Se argumentaba que las condiciones de la distribución del ingreso y de la baja absorción de mano de obra que habían derivado del "desarrollo estabilizador", imponían de manera urgente

una reorientación del desarrollo. Se procuraría incorporar nuevos objetivos, además del de sostener un elevado crecimiento económico, que permitieran resolver los desequilibrios estructurales que a la larga limitaban el progreso sostenido; se aspiraba a combatir los problemas de la excesiva concentración del ingreso, del desempleo y subempleo, y de la incipiente producción de bienes y servicios básicos o de consumo popular. Las circunstancias que se presentaron vinieron a influir y a definir esta estrategia, el mecanismo puesto en práctica mediante el cual se pretendían alcanzar dichos objetivos fue principalmente el de una rápida expansión del gasto público.

En efecto, el gasto público (en consumo e inversión) se incrementó pronunciadamente; su crecimiento medio anual a precios constantes durante los años de 1972 a 1975 fue de 15.5% y de 12.5% en el período 1972-1976, puesto que en el último año se mantuvo casi constante (0.6%), frente a un incremento medio anual de 9.9% de 1965 a 1970. En estas nuevas erogaciones sobresalió de manera extraordinaria el gasto corriente, cuyo efecto se dejó sentir en la demanda agregada, la cual alentó la producción de bienes y de servicios, pero la productividad de muchos de estos gastos corrientes en general resultó muy baja o nula.

La inversión bruta fija pública en términos reales aumentó en promedio anual a razón de 12.6% de 1971 a 1975 y de 10.3% durante 1971-1976, mientras que en el período 1965-1970 su crecimiento medio anual fue de 6.9%. Por su parte, durante 1971-1976 la inversión bruta fija del sector privado, también a precios constantes, registró una caída al reducirse a razón de 2.6% anual, lo que contrasta con el incremento medio anual de 10.8% que observó en el lapso 1965-1970. El resultado de estos comportamientos divergentes fue que el coeficiente o tasa de inversión para la economía en su conjunto se mantuvo casi sin variación durante el período 1971-1976, si bien se redujo en el último año; en 1971 fue de 18.2%, en 1975 de 19.1% y en 1976 de 17.3 por ciento.

La actitud adoptada por el sector privado en el sentido de no elevar sus inversiones —a precios constantes— significó haber detenido la puesta en práctica de numerosos proyectos industriales y el posponer las ampliaciones en la capacidad de producción de muchas empresas.

Diversas circunstancias se conjugaron para determinar esta conducta de la iniciativa privada cuya complejidad no permite reconocer su diverso grado de importancia, pero sí identificar alguno de los principales factores: a) falta de confianza o de seguridad en el ambiente económico, político y social; b) el menor crecimiento en el ingreso generado, y c) la menor disponibilidad de recursos financieros, tanto por la menor captación vía productividad, como por las políticas inflacionarias y monetaria que concentraron los ahorros hacia el Estado (mediante la creación de dinero primario —impresión de billetes— y el

aumento en el encaje legal), lo que restringió el crédito, habiéndose afectado en mayor medida a las empresas pequeñas y medianas que resintieron la falta de créditos. Hubo momentos en que se polarizaron las posiciones de los sectores público y privado, lo que se reflejó de alguna manera en la actividad común o unificada de ciertos grupos de empresarios que utilizaron su poder para ejercer distintas presiones sobre el gobierno y que trascendieron del medio económico al político. Se entró en otro campo de acción y no se trató exclusivamente de insuficiencia de recursos por parte de los empresarios del sector privado, sino que éstos condicionaron su acción a la defensa de sus intereses como grupo. No es extraño, por lo tanto, que la iniciativa privada dejara de cumplir su responsabilidad social como importante agente de estímulo a la vida económica, pasando a ser un elemento pasivo que deja la iniciativa promotora al Estado.

La reacción del sector público se consolidó paulatinamente en la medida en que consideró indispensable incrementar sustancialmente su gasto, en un principio a fin de salir de la "atonía" de 1971 y, posteriormente, para alcanzar los altos niveles de crecimiento económico y justicia social que pretendía. El estímulo a la demanda agregada que generó el gasto del sector público no pudo compensarse en materia de inversiones con las que hubiera realizado el sector privado, puesto que se trató de campos distintos en donde se inyectaron los recursos, lo que generó ciertos desequilibrios sectoriales que contribuyeron a la aparición de presiones inflacionarias. Esto último también fue auspiciado notablemente por el importante gasto corriente del gobierno. Luego entonces, dentro de la estructura económica del país, existió una diferencia de tipo cualitativo entre el gasto público y el privado, sobre todo en las inversiones respecto a su incidencia sobre el crecimiento, el nivel de empleo y los precios.

Los resultados de la nueva política económica medidos por el comportamiento del PIB real fueron alentadores en 1972 y 1973, cuando se observaron tasas de 7.3 y 7.6 por ciento, respectivamente; sin embargo, a partir del año siguiente se inicia una tendencia contraccionista, su expansión se reduce a 5.9%, baja después a 4.2% en 1975 y a 2% en 1976. Así, mientras que la tasa media de incremento anual del PIB real durante los años 1959-1970 fue de 6.7%, en el sexenio 1971-1976 disminuyó a 5.1%. En estos términos, la nueva estrategia no alcanzó su objetivo de mantener un elevado crecimiento de la actividad económica.

El estado de recesión con inflación que caracterizó a la economía mexicana a partir de 1973, puede explicarse por la retracción en la inversión privada, por la forma en que fue financiado el elevado déficit gubernamental y por su impacto en la economía (sobre todo en el sector externo), así como por la influencia de la coyuntura internacional.

El excesivo aumento del gasto público financiado artificialmente, frente a una capacidad de producción que crecía muy lentamente, provocó la ruptura de la estabilidad de precios. La tasa de inflación, medida por el índice de precios implícito en el PIB, registró aumentos explosivos de 12.4, 24, 16.5 y 20.6 por ciento en 1973, 1974, 1975 y 1976, respectivamente (en 1971 y 1972 dichos incrementos respectivos fueron de 4.4 y 5.6 por ciento). Por otra parte, se observa una marcada diferencia en el crecimiento de los precios en los períodos que se comparan; de una tasa media anual de 3.6% correspondiente a 1959-1970, se pasó a una de 13.9% en los años de 1971 a 1976. Así, mientras que en los doce años comprendidos en el primer lapso el nivel de precios acumulado aumentó 43.2%, en los últimos seis años lo hizo en 83.5 por ciento.

El déficit consolidado del sector público aumentó de manera espectacular; de representar 2.7% del PIB corriente en 1971 se elevó a 10.2% en 1976; el volumen y la rapidez con que se incrementó dicho déficit influyeron en las diversas fuentes más asequibles para su financiamiento. A diferencia de la forma en que fue financiado el déficit gubernamental durante el período 1959-1970 —o sea principalmente a través de la apropiación por parte del Estado (encaje legal) de ahorros reales internos, captados por el sistema bancario—, en los últimos años no fue suficiente esta fuente de recursos a pesar de que el encaje legal aumentó en promedio hasta el 77% (dejando por tanto un reducido volumen de fondos prestables a la banca comercial), por lo que se decidió aumentar sustancialmente la creación primaria de dinero o la emisión de deuda interna de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Banco de México, S. A. En efecto, el crecimiento de la oferta monetaria (de diciembre a diciembre) pasó de un promedio anual de 10% durante 1965-1970 a uno de 21.3% en el lapso 1971-1976, habiendo superado con mucho el incremento del circulante monetario al volumen que normalmente hubiera requerido una mayor actividad económica prevista, creando, por tanto, fuertes presiones inflacionarias.

El excesivo aumento en los precios desalentó el consumo al afectar el poder de compra real de la mayoría de la población, lo que además de desestimular la actividad económica, representó sin duda alguna un mecanismo para captar ahorros forzados de la clase media y de los sectores pobres de la población. Resulta evidente que este medio de financiamiento es incompatible con objetivos de justicia social, aunque una parte de este gasto se haya inyectado en obras de beneficio colectivo. Cuando por esta vía se captan ingresos —y no, por ejemplo, vía impuestos— el Estado utiliza un medio que tiene a su alcance y que para la mayoría de la población pasa desapercibido, pero lo resiente más tarde aunque ignora el mecanismo que le sustrajo de su bolsillo el ingreso monetario real y no lo identifica con la fábrica que trabajó día y noche para imprimir billetes que se lanzan a la

circulación a través del gasto del sector público. Esta forma de captación de ingresos por parte del gobierno resulta enmascarada e injusta porque grava más a los necesitados y respeta o elude a la clase privilegiada que debería aportar más al esfuerzo o sacrificio que significa el desarrollo económico del país. En este sentido, vale la pena reproducir lo apuntado por Víctor Flores Olea en la primavera de 1976:

Actualmente la derecha parece decidida a movilizar sus fuertes recursos económicos y publicitarios para presentar un país erosionado que debe aceptar cambios en nombre del sagrado derecho de propiedad, postulándose a sí misma como el grupo y la conciencia de la salud nacional. De la presión económica y del chantaje pasa abiertamente a la agresión política, de la asociación económica y mercantil a la organización subversiva. Esta es una realidad que no puede desconocerse ni minimizarse... La paradoja es que la extrema derecha mexicana muestra su perfil más agresivo en una etapa en que se acrecientan sus ganancias y privilegios. Tal vez esa paradoja estaba inscrita, desde el inicio, en el proyecto de un desarrollo nacional *mixto*, dentro del cual debían avanzar equilibradamente el sector público y el privado. La infraestructura creada por el Estado ha fortalecido, a la postre, la acumulación de riqueza en manos de los particulares y ha servido también para estimular la prepotencia y ambición política de la extrema derecha.¹

Otro elemento que también contribuyó a generar presiones inflacionarias se localizó en los aumentos salariales concedidos durante el periodo 1971-1976. En efecto, las expectativas generadas por las repetidas manifestaciones del gobierno sobre su interés de "compartir el desarrollo", así como la pérdida en el poder de compra real de las grandes mayorías de la población derivada de las propias alzas de precios, fueron factores que presionaron para que se concedieran generosos aumentos en los salarios nominales. El incremento de salarios fue de tal naturaleza que superó ampliamente los aumentos alcanzados en la productividad del trabajo; mientras que los salarios mínimos nominales aumentaron en promedio anual 17.1% durante 1971-1976, el incremento medio anual en la productividad del trabajo en esos mismos años apenas alcanzó 2.4%. Esto, por sí mismo, provocó una presión inflacionaria (autónoma) que fue aprovechada por aquellos empresarios privados que pudieron repercutir el incremento de sus costos en el consumidor final, manteniendo o elevando sus niveles de ganancias. En esta envidiable situación se encontró la gran empresa, incluyendo a las inversiones extranjeras directas; en cambio, la mediana empresa y sobre todo la pequeña empresa se vieron en condiciones difíciles, muchas de estas últimas se presentaron en quiebra al no poder competir por sus altos costos. Al conjugarse presiones internas que

¹ Véase "Notas sobre política mexicana" en *Nueva Política*, núm. 2: *El sistema mexicano*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, abril-junio de 1976, pp. 6 y 7.

presionaban al alza los precios, más las externas por el encarecimiento de las importaciones —debido a la inflación mundial— ambas atizaron el círculo vicioso inflacionario: precios-salarios-precios.

De 1973 a 1975 la economía mundial pasó por una grave crisis de recesión inflacionaria, cuyos efectos en la economía mexicana se manifestaron principalmente a través de tres elementos: 1) aumentos en las cotizaciones internacionales de alimentos que México tuvo que adquirir y en mayores cantidades debido a la insuficiente oferta interna, sobre todo de productos básicos de consumo popular; 2) también alzas en los precios de diversos materiales y de bienes de capital que el país necesitó para sostener e incrementar la capacidad de su aparato productivo; y 3) la pronunciada recesión por la que atravesaron los principales países industrializados de economía de mercado, especialmente desde el segundo semestre de 1974 hasta finales de 1975, que se tradujo en una reducida demanda externa para productos mexicanos de exportación, algunos de los cuales incluso sufrieron bajas en sus cotizaciones internacionales. La conjugación de estos factores reforzó de manera significativa la inflación de origen interno experimentada por la economía mexicana, así como en el recrudescimiento de su desequilibrio externo.

La insistencia por mantener un desproporcionado gasto público a pesar de las elevadas tasas de inflación, condujo a una fuerte generación de ingreso monetario nominal que se desbordó en gasto externo excesivo y que repercutió en un crecimiento sin precedente del desequilibrio externo de la economía. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se incrementó continuamente, al pasar de 726.4 millones de dólares en 1971 a 3 768.9 millones en 1975 (o sea en poco más de cinco veces), disminuyendo ligeramente en 1976 cuando registró 3 023.7 millones de dólares. Esta brecha tuvo que ser compensada sobre todo mediante el flujo de recursos externos a largo plazo; la entrada neta de capitales externos a largo plazo ascendió de 669.1 millones de dólares en 1971 a 4 889.9 millones en 1976 (o sea que se multiplicó por más de 7 veces); la deuda pública externa a largo plazo aumentó de 4 546 millones de dólares en 1971 a 20 000 millones en 1976. El saldo deficitario acumulado de la cuenta corriente durante el lapso 1971-1976 ascendió a 12 014 millones de dólares, mientras que en el mismo período el incremento acumulado de la deuda pública externa fue de 15 454 millones de dólares.

A la disponibilidad de recursos externos coadyuvó el exceso de liquidez que hubo en los mercados internacionales de dinero y capital. Desde el otoño de 1974 las tasas de interés prevalecientes, como la *prime rate* de Estados Unidos y la *Libor* de eurodólares, estuvieron disminuyendo y se mantuvieron bajas hasta finales de 1977.

Sin embargo, la captación de estos mayores recursos resultó más cara que la de los procedentes de organismos financieros internacio-

nales. Ante la incapacidad de estos organismos para la provisión de mayores fondos, los grandes bancos comerciales del mundo se convirtieron en la principal fuente de recursos financieros, puesto que en sus manos quedó el reciclaje de los petrodólares para poder financiar los enormes déficit en las cuentas corrientes de las balanzas de pagos —sobre todo de los países importadores de hidrocarburos—, desde el otoño de 1973 cuando se incrementaron los precios del petróleo. En estas condiciones, México pasó a ser mucho más dependiente de la banca comercial internacional y de las tasas de interés que se fijan en los mercados mundiales de capital (y que más tarde se convertirían en otra importante fuente de presiones inflacionarias para México debido al notable encarecimiento de los créditos —por la inflación mundial— y de su dañina influencia en la fijación de la tasa de interés para créditos internos, puesto que esta última se fija generalmente por encima de la tasa de interés prevaleciente en el exterior para el dólar estadounidense, a fin de retener y atraer capitales nacionales y extranjeros, debido a la libertad de cambios que tradicionalmente ha tenido el país).

Al impresionante desequilibrio externo de México contribuyeron los ambiciosos programas de gasto público, junto con una actividad económica y un incremento de precios internos superiores a los de nuestros principales clientes y proveedores externos (en especial Estados Unidos), provocando un efecto de mayor demanda interna por importaciones y de menor demanda externa por nuestras ventas; la sobrevaluación del peso mexicano, que desde principios del decenio setenta ya se calculaba superior al 30% respecto del dólar estadounidense, también influyó en la pérdida de competitividad de las exportaciones del país y en el aliento a las importaciones.

En 1976 la economía mexicana atravesó por un ambiente de incertidumbre económica, política y social sin precedente. Aunque durante 1975 se vieron ligeramente disminuidas las presiones inflacionarias, al año siguiente el alza de precios se disparó, en parte como consecuencia del incremento en el gasto público tendiente a la conclusión de grandes proyectos en proceso de terminación. Esto, aunado al elevado nivel alcanzado en 1975 por el déficit de la cuenta corriente (3 768.9 millones de dólares), por el déficit consolidado del sector público (96 500 millones de pesos) y por la deuda pública externa (14 449 millones de dólares), generó una avalancha de especulación respecto al tipo de cambio que agudizó el desequilibrio externo de la economía. En efecto, durante los últimos años una parte cada vez mayor de la deuda pública externa tuvo que destinarse a compensar las salidas especulativas de capital nacional al exterior. Según fuentes norteamericanas extraoficiales, los pasivos a corto plazo a favor de mexicanos registrados en bancos de Estados Unidos se incrementaron de 715 millones de dólares en 1971 a 2 077 millones en 1975; durante

el primer semestre de 1976 este proceso de descapitalización se recrudeció notablemente, calculándose que la fuga de capitales del país ascendió aproximadamente a 2 000 millones de dólares y para todo el año en 4 000 millones.

Ante estas circunstancias, pareció que ya no era posible seguir adquiriendo préstamos externos a largo plazo en las mismas condiciones ni en las cantidades suficientes para cubrir el creciente desequilibrio de la balanza de pagos, habiéndose llegado probablemente al límite de la capacidad de endeudamiento del país. Por lo tanto, el 31 de agosto de 1976 el gobierno optó por abandonar el tipo de cambio fijo de nuestra moneda, después de 22 años de estabilidad cambiaría con respecto al dólar de Estados Unidos; al ponerse a "flotar" el peso mexicano se devaluó de ocho hasta un poco menos de cuatro centavos de dólar estadounidense; al terminar el año mostró fluctuaciones alrededor de esta nueva paridad cambiaría, estabilizándose en cinco centavos o en cerca de 23 pesos por dólar.

La desvalorización del peso, junto con el mantenimiento de la libre convertibilidad cambiaría, la autorización de aumento en los precios de numerosos artículos y servicios que estaban bajo control oficial y los incrementos generales de salarios concedidos por el propio gobierno, aunados a una mayor incertidumbre hasta entonces desconocida en el país, ocasionaron que durante los últimos meses de 1976 se acentuara la salida de capitales, aumentara la deuda pública externa a niveles insospechados y se registrara la tasa de inflación más elevada para la economía mexicana desde hacía 25 años (el índice nacional de precios al consumidor aumentó 27.2% y el índice de precios al mayoreo en la ciudad de México se elevó 45.9%).

En estas condiciones al concluir su sexenio en 1976 el gobierno fracasó en sus objetivos de lograr un aumento significativo en los ingresos monetarios reales de la clase trabajadora o en la mejor distribución del ingreso. Con los medios utilizados por el Estado, ante la actitud desconfiada y hostil del sector privado, solamente provocó una mayor desestabilización de la economía sin conseguir su propósito inicial.

Esto se confirma al saber que la razón ingreso laboral-producto en términos reales se mantuvo casi constante desde 1965, cuando fue de 30.7%, para 1976 apenas se situó en 31.2 por ciento.

Con base en los aumentos nominales registrados en los salarios mínimos, deflacionarios con los incrementos registrados en el índice de precios implícito del PIB, la tasa media anual de aumento en los salarios mínimos reales durante los años 1959-1970 fue de 2.7% y se mantuvo prácticamente igual en el período 1971-1976, cuando resultó de 2.8%. Este último crecimiento promedio de los salarios mínimos reales debe ponderarse respecto a la estructura de la población económicamente activa del país a fin de evaluar su verdadero significado.

Se estima que durante el lapso 1971-1976 hubo en el país aproximadamente unos 17.5 millones de personas económicamente activas (o potencialmente activas), de las cuales se sabe que en números redondos solamente 4.5 millones estuvieron sindicalizados o pertenecieron a diversas agrupaciones gremiales, mientras que hubo por lo menos 10 millones de trabajadores sin ningún tipo de organización que les permitiera defender su nivel de vida. Los aumentos concedidos en los salarios mínimos nominales probablemente protegieron a la población sindicalizada y de diversas agrupaciones, al compensar su ingreso real ante las alzas de precios, mientras que la población marginada difícilmente pudo disfrutar de los salarios mínimos, sobre todo por la relativa abundancia de mano de obra respecto a la demanda existente. El desempleo y el subempleo se estima que en 1970 abarcó al 48.5% de la fuerza de trabajo y en 1976 llegó al 53.4%.² Así, las presiones inflacionarias de los últimos años golpearon duramente a las capas sociales más pobres y a los subempleados que no contaron con ningún mecanismo de defensa. De igual manera, aunque menos grave, todos aquéllos de la llamada clase media que recibieron ingresos fijos —no ajustables en la misma proporción a la de los aumentos de precios—, también tuvieron que resentir sus efectos desfavorables.

En resumen, en el periodo 1971-1976 la actividad económica del país perdió dinamismo y estabilidad, como resultado de las presiones inflacionarias que se desataron y de la utilización de estímulos insuficientes o incorrectos para promover la producción; se contrajo el ya reducido ingreso *per capita* real de la mayoría de la población y hubo una mayor concentración del ingreso a favor de los privilegiados y en perjuicio de los sectores mayoritarios. La inflación también distorsionó la eficiente asignación de los recursos productivos e incidió determinantemente en el deterioro de las cuentas externas y en el desproporcionado incremento de la deuda pública externa; también provocó un recrudecimiento de los problemas estructurales y se agravó la dependencia respecto del exterior.

III. *¿Desarrollo compartido o economía ficción?*

Tal parece que en el sexenio 1971-1976 se optó por aplicar, de manera simplista, el enfoque keynesiano, pues se expandió sin medida visible el gasto público a través de un creciente déficit gubernamental con la intención de alcanzar rápidamente los objetivos de mayor crecimiento, más empleo y mejor distribución del ingreso, descuidando por completo los efectos a corto plazo de las variables monetarias sobre

² Véase, Manuel Gollás, "El desempleo en México, soluciones posibles" en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) revista *Ciencia y Desarrollo* (México), mayo-junio 1978, p. 74.

la actividad económica y las restricciones de una débil economía dependiente económica y financieramente del exterior.

Las decisiones que conformaron la política económica de este período estuvieron determinadas por factores y consideraciones de tipo eminentemente político o personal, habiéndose subestimado los elementos o variables de la ciencia económica, así como sus repercusiones de índole social, las cuales en ningún momento escaparon al fuerte control político a que tradicionalmente están sometidas en México. Sin embargo y a diferencia de los gobiernos precedentes, sí hubo notables discrepancias entre las personas que condujeron la política económica y que trascendieron al público, la más notable ocurrió en mayo de 1973, cuando tuvo que renunciar "por motivos de salud" el propio Secretario de Hacienda y Crédito Público.

El "diálogo abierto" que el mismo gobierno alentó, permitió dejar constancia de numerosas declaraciones, muchas veces contradictorias, de las corrientes de opinión que destacados funcionarios públicos apoyaban. De esta manera se puede confirmar que las consecuencias de las decisiones que se adoptaron en materia económica fueron claramente previsible, si se releen, por ejemplo, los conceptos expresados por el entonces Director General del Banco de México, S. A., Ernesto Fernández Hurtado:

Podría creerse que nos enfrentamos a una disyuntiva entre una mayor inflación o un mayor nivel de desempleo. La experiencia reciente de un gran número de países y las que afectaron algunos sectores industriales de nuestro país a fines de 1974, es una muestra elocuente de la falsedad de ese dilema de política económica; se ha constatado cómo la inflación no sólo puede ir acompañada de niveles crecientes de desempleo sino aún contribuir en forma importante a éstos, tanto por la merma que se produce en el poder de compra de amplios sectores de la población, como por el *indiscutible deterioro que determina en los ahorros y deseos de inversión productiva* de la comunidad... No son únicamente la solidez del peso y lo que ella significa para elevar el nivel de empleo y mantener la estabilidad de precios y confianza del ahorrador, los factores que en el corto plazo justifican estas políticas; es también el reconocimiento de las restricciones observadas en la tasa de crecimiento real de la economía, lo que permite concluir que *un impulso adicional indiscriminado y general a la demanda por medio de un exceso de financiamiento al sector público y al privado, se traduciría por ahora en más elevados índices de crecimiento en los precios y de los niveles de importación, sin alentar la producción y el empleo.*³

Durante los últimos cinco años el crecimiento de las importaciones, excluyendo las extraordinarias de petróleo y derivados, y de alimentos, así como el impacto de la inflación externa, ha seguido un ritmo anual que

³ XLI Convención Anual de la Asociación de Banqueros de México, 1975. El subrayado es nuestro.

ha duplicado la tasa del quinquenio 1965-1970. Este aceleramiento está determinado en buena parte por el *alto nivel de financiamiento deficitario del sector público* en su conjunto. Se acude *en exceso al financiamiento con recursos expansionarios del Banco de México y del exterior*. Pero debemos reconocer que es sólo la forma financiera que adopta un problema cuyo fondo se encuentra, fundamentalmente, en la *insuficiencia de ahorro nacional, público y privado*, en relación con nuestra necesidad de mantener un nivel elevado de inversión que permita alcanzar un desarrollo sostenido y compartido a los mexicanos... En efecto, al concederse financiamientos con recursos internos y externos que exceden al ahorro nacional, se genera una demanda interna que excede la producción, se disminuye, por consumirse internamente, la oferta exportable de bienes a la vez que se elevan las importaciones de los productos de los que somos deficitarios, con lo cual, por insuficiencia de exportaciones y aumento de importaciones, se eleva el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.⁴

Aunque la opinión pública del Director General del banco central no dejaba de ser importante, sus advertencias no fueron escuchadas, puesto que se continuó incrementando el déficit inflacionario del sector público de manera excesiva y se siguió recurriendo indiscriminadamente a ese instrumento de política económica como si fuera el único camino para alcanzar a corto plazo los objetivos de la nueva estrategia.

Después de que se llegó al punto de tener que devaluar el peso, el propio Fernández Hurtado hizo las siguientes declaraciones en el discurso que pronunció ante la reunión anual de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en la ciudad de Manila, Filipinas, en octubre de 1976, mismas que confirman lo apuntado:

[En México] Ante la preocupación de reducir a corto plazo niveles elevados de desempleo, ya establecida la recuperación económica mundial, los esfuerzos excesivos por acelerar la actividad económica han probado ya convertirse más bien en generadores de nuevas presiones inflacionarias y de déficit crecientes de balanza de pagos, impidiendo, en vez de propiciar, la solución del problema del desempleo. En esas condiciones políticas salariales demasiado presionantes, ante la imposibilidad de aumentar a corto plazo la productividad, sólo han contribuido a agudizar aún más estos problemas, sin elevar los salarios en términos reales... La lucha contra la inflación ayuda más a elevar el nivel de empleo y a corregir el déficit de la balanza de pagos, que el empeño en una política expansionista. Ésta a menudo resulta contraproducente. No hay nada más depresivo de la actividad económica real que un proceso de inflación sostenido.

⁴ *Intervención del Lic. Ernesto Fernández Hurtado en el Seminario sobre Técnicas de la Importación, organizado por la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, el 10 de julio de 1975. El énfasis es nuestro.*

Probablemente estos juicios sirvan para confirmar cómo las decisiones políticas al más alto nivel fueron las que predominaron, después de haber escuchado puntos de vista que incluían recomendaciones opuestas y que llevaban alguna fuerza política, incluyendo de manera consistente argumentos técnicos exentos de aspectos demagógicos o ideológicos.

Otro aspecto que llama notoriamente la atención de la economía politizada de México se refiere a la devaluación del peso ocurrida el verano de 1976. No obstante haber existido el peligro de "tener qué devaluar" quizá desde finales del decenio sesenta y sobre todo durante los cinco años siguientes, sorprende la falta de planes de contingencia que fueran coherentes y adaptados al medio mexicano y que hubieran evitado el desconcierto, la incertidumbre y la extrema especulación que vivió la economía del país durante los últimos meses de 1976. Hay que reconocer que resultó demasiado violenta e inesperada la reacción del sector privado y de la mayoría de los ahorradores que cambiaron por divisas cuantos recursos líquidos tenían; esta fuga de capitales precipitó aún más la caída del peso y permitió ganancias extraordinarias a los especuladores. Independientemente de la sorpresa y de la gravedad de los acontecimientos, de cualquier manera predominó la falta de previsión y el desconocimiento o falta de preparación de los funcionarios públicos —principalmente de los políticos— para hacer frente a una situación que tenía que suceder más temprano que tarde.

IV. Conclusiones

En el sexenio 1971-1976 se sintió, con un vigor desconocido para las últimas administraciones públicas, la enorme autoridad y su mayor concentración en el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal. En algún momento esta concentración de poder llegó a cimbrar los cimientos de la organización y de las instituciones que encauzan las actividades económicas del país, habiendo confirmado su preeminencia, puesto que las principales decisiones sobre la dirección de la economía generalmente se politizaron en el medio oficial a un nivel sin precedente. Estas decisiones desvirtuaron el uso apropiado de los instrumentos de la ciencia económica. Todo esto independientemente de que las intenciones hubieran sido las de procurar un mayor bienestar hacia las grandes mayorías de la población.

En la aplicación de una nueva estrategia económica para pretender lograr un progreso compartido, no se emprendieron reformas radicales que hubieran afectado la estructura del sistema económico de México. La rigidez de dicho sistema y lo limitado de la política económica aplicada originaron, primero, una mayor desestabilización del desarrollo y, después, el estancamiento inflacionario. De esta manera el ímpetu desbordado de las acciones oficiales en materia económica,

sobre un aparato productivo de incipiente desarrollo, más que alentar entorpeció la materialización de los propósitos anhelados.

En seguida se resumen a manera de *conclusiones* las medidas de política económica o de la economía politizada adoptadas por el gobierno durante el sexenio 1971-1976, mismas que dejaron al país en una severa crisis económica:

1) Políticamente quizá no se ponderó en su justo valor (o se relegó) la importancia que todavía tiene la inversión privada como promotora del crecimiento de la economía mexicana, puesto que una parte significativa de las ramas productivas (agrícolas, industriales, comerciales y financieras) se encuentran en manos de la iniciativa privada. Las inversiones del sector privado resintieron parcialmente su desplazamiento en el financiamiento interno —vía encaje legal y utilización de los ahorros por el sector público—, pero la mayoría de las empresas privadas que pudieron hacerlo acudieron a los mercados financieros de Estados Unidos y Europa para cubrir sus requerimientos de liquidez. Más bien lo que predominó fue una actitud independiente y deliberada del sector privado, en el sentido de reducir el crecimiento de sus inversiones, lo cual refleja una ausencia de responsabilidad social. Por lo tanto, no fueron solamente las ganancias económicas las que promovieron su iniciativa, también prevalecieron otros factores teñidos de influencia política. Esta conducta egoísta se confirma al haber descapitalizado al país, sobre todo durante el segundo semestre de 1976 cuando recibieron ganancias extraordinarias aprovechando la devaluación de la moneda; devaluación a la que ellos también contribuyeron o propiciaron.

2) Independientemente de que una creciente intervención estatal en las economías de escasa evolución es síntoma de madurez y de que es la forma más viable de resolver los desequilibrios estructurales que se generan en el sistema capitalista, así como de promover el progreso económico, no deja de parecer incomprensible la forma tan agresiva y anárquica en que se llevó a cabo la expansión del gasto público; quizá no fue la más inteligente dentro de las alternativas que el Gobierno Federal tenía ante sí.

3) La falta de una apropiada reflexión sobre las consecuencias de utilizar un excesivo déficit gubernamental, a fin de estimular la actividad económica a cualquier costo —incluyendo el empobrecimiento de gran parte de la población mexicana—, es inconsistente con el objetivo de una distribución del ingreso menos inequitativa y, a la vez, expandir el ingreso por vías inflacionarias. Los grupos empresariales que controlan el aparato productivo y que por tanto manipulan los precios a su conveniencia, sobre todo dentro de la estructura oligopólica que predomina en México, fueron los que resultaron beneficiados con las prácticas inflacionarias.

4) Por otra parte, refleja una concepción demasiado simplista del esquema teórico de política económica que debe aplicarse en un país en desarrollo, como es el caso de México; se sobreestimó la capacidad del aparato productivo del país, por lo que la receta keynesiana de aumentar la demanda agregada a través de la expansión indiscriminada del gasto gubernamental, que supuestamente pretendía generar un mayor crecimiento y redistribuir el ingreso vía empleo, sólo podía conducir tarde o temprano a un proceso inflacionario que iría precisamente en contra de dichos objetivos.

5) La carencia ya no digamos de planeación sino inclusive de coordinación en el gasto público, también contribuyó a generar presiones inflacionarias puesto que una elevada proporción del gasto no se destinó a inversiones estrictamente productivas. La creación de una multitud de fondos o fideicomisos y de otros organismos públicos, además de provocar una duplicación de funciones y de alentar la corrupción, aumentó considerablemente el gasto corriente del sector público, incidiendo en el alza de precios sin establecer suficientes mecanismos efectivos que posteriormente frenaran la inflación.

6) No obstante los mayores incrementos de las inversiones públicas y de otros gastos hacia el sector agropecuario, sus dificultades estructurales siguieron predominando. A las declaraciones populistas se añadió el agravamiento del problema de las invasiones ilegales de tierra y la generalización de la inseguridad en el campo de varias regiones del país, lo que desalentó las inversiones de los pequeños y medianos propietarios, particularmente en la agricultura comercial. Esto influyó en el desfavorable comportamiento del sector agropecuario, el cual de constituir un sector generador de divisas, se convirtió en un peso adicional sobre el déficit de la balanza comercial, al tener que importarse cuantiosos volúmenes de productos de consumo popular para poder satisfacer la demanda interna.

7) La generación del ingreso monetario que se propició con los enormes gastos del Estado, en una economía abierta como lo es la mexicana, frente a una oferta interna de bienes y servicios insuficiente para atender la demanda agregada que crecía ilimitadamente, tuvo que repercutir con gravedad en la balanza de pagos. Se recurrió sin medida al crédito externo, incrementando explosivamente la deuda pública suscrita en moneda extranjera a fin de poder compensar los requerimientos de divisas ocasionados por el excesivo déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y de las salidas de capital especulativo en contra de la moneda nacional, en vez de adoptar medidas oportunas que redujeran ese desequilibrio. En estas condiciones parece que se puso a prueba hasta agotar la capacidad de endeudamiento de la nación y el alcance de su vulnerabilidad o dependencia respecto de presiones político-económicas del exterior.

8) Se fomentó una política salarial que pretendía, bajo una doctrina de carácter populista, correr más rápido que el alza de precios. No cabe duda que el insoslayable objetivo de alcanzar una distribución equitativa del ingreso implica aumentos sustanciales en los salarios, pero esos aumentos tienen que ser en términos reales y no ficticios o disfrazados. Los incrementos nominales de salarios, además de no tener ninguna relación con el aumento de la productividad, nunca lograron compensar el deterioro del ingreso real, pero sí contribuyeron a consolidar el círculo inflacionario precios-salarios-precios que tanto perjudicó al grueso de la población marginada que carece de organizaciones sindicales para defender sus genuinos intereses. El Estado no encontró medios apropiados ni tampoco generó el ambiente propicio para que se concillaran los aumentos de salarios con los incrementos en la productividad, menos aún existió una actitud solidaria y responsable de parte de los empresarios privados.

9) Esta experiencia reciente de la economía politizada dejó al descubierto el poder público piramidal que impera en México. No debería sorprender el alcance que esta concentración de autoridad puede acarrear para afectar la estructura misma del sistema económico, político y social.

10) Y sin embargo, uno se pregunta ¿por qué entonces no se tomaron decisiones de mayor envergadura en el campo económico si el gobierno tenía la fuerza política suficiente para hacerlo y si pensaba en términos de defender a los marginados? Es muy probable que las clases privilegiadas hayan salido más robustecidas puesto que sus propiedades no se vieron prácticamente afectadas y ellos sí, en cambio, reaccionaron poderosamente en defensa de sus intereses.

11) En síntesis, la acción política generó una falta de concordancia entre lo que se dijo y lo que se hizo y sus resultados; se provocó una pérdida de confianza en la seriedad del gobierno, que condujo a actitudes negativas y a fenómenos psicológicos que estremecieron la estabilidad del sistema de economía "mixta" (sectores social, público y privado).

12) A partir del 10. de diciembre de 1976, el nuevo gobierno tuvo que enfrentarse desde el primer momento con los graves problemas coyunturales que afectaban la economía: la inflación extraordinaria, el fuerte desequilibrio negativo de la cuenta corriente, el excesivo endeudamiento externo, el gran déficit presupuestal y una crisis de confianza que afectó a los negocios. A éstos habría que añadir los problemas estructurales que se vieron recrudecidos por la desestabilización de la economía en los últimos años, como son el desempleo y el subempleo masivos, la mayor concentración del ingreso, la persistencia del déficit en la producción agrícola de consumo popular y una estructura industrial ineficiente, demasiado protegida y excesivamente supeditada a insumos importados. Además hay que agregar los efectos

de los fenómenos psicológicos, cuyo impacto sobre la economía mexicana no tenía precedente y que vinieron a distorsionar la realidad económica; quedaron una relativa polarización en las actitudes de los sectores público y privado, la inestabilidad en el tipo de cambio de nuestro signo monetario y en algunas regiones agrícolas importantes siguió predominando el temor sobre la propiedad de la tierra. Igualmente grave fue el legado que se recibió en cuanto a la incertidumbre entre los hombres de empresa del sector privado para realizar inversiones y para repatriar sus capitales.